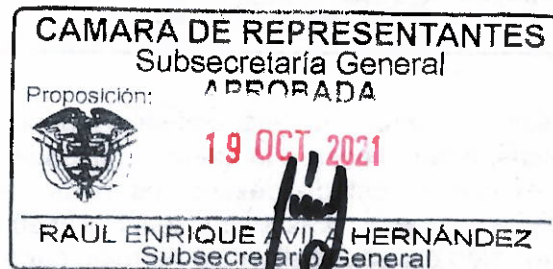


Bogotá D.C, octubre de 2021

Honorable Representante  
**JENNIFER KRISTIN ARIAS FALLA**  
Presidente  
CÁMARA DE REPRESENTANTES



**PROPOSICIÓN No. DE 2021**

N:061

Respetada Presidente Jennifer,

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 233 y 234 de la Ley 5 de 1992, solicito comedidamente a la Honorable Comisión Séptima de la Cámara de Representantes se cite a Debate de Control Político, en la fecha y hora que la Mesa Directiva defina, al: Ministro del Interior, Doctor Daniel Palacios Martínez, Ministro de Hacienda y Crédito Público, doctor José Manuel Restrepo Abonado, Ministra de Comercio, Industria y Turismo, doctora María Ximena Lombana Villalba, Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (E), Doctor Ivan Mauricio Duran Pabón, Ministro de Trabajo, doctor Ángel Custodio Cabrera Báez, Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, doctor Carlos Eduardo Correa, Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, doctor Rodolfo Enrique Zea Navarro, y Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, doctor Jonathan Malagón González.

Con el fin que rindan informe sobre *“acciones, gestiones y ejecuciones realizadas en el marco del cumplimiento de leyes dirigidas o con beneficios para la población negra y afrocolombiana.”*

Las comunidades negras y afrocolombianas a lo largo de la historia han sido puestas en condiciones de marginalidad y han vivido el desconocimiento de sus derechos, lo que en la actualidad se ha hecho aún más notorio con la invisibilización de que son víctimas y la situación de pobreza y marginalidad que viven. Pese a esto, dichas comunidades han sido reconocidas constitucional, legal y jurisprudencialmente como población culturalmente diversa, con identidad e integridad propia y sujetos de distintas normas constitucionales, nacionales e internacionales, que buscan salvaguardar su diversidad étnica y cultural; en tal sentido, en el país han sido expedidas diversas normas que buscan brindar y reconocer el derecho a la equidad de la población afrocolombiana y que implican que las entidades y autoridades públicas deban brindarles un trato especial que atienda sus situaciones o circunstancias dispares respecto al resto de la población y que estén acordes con sus particularidades propias.

Como quiera que las comunidades negras y afrocolombianas son minorías étnicas y están en condición de marginalidad a nivel social y económico, tienen derecho a que les sean reconocidos beneficios y garantías especiales y en consecuencia, tienen derecho a que les sean expedidas leyes y normas con un enfoque diferencial basado en su diversidad étnica, que les permitan, entre otros: gozar de su derecho a la propiedad colectiva, participar frente a la explotación de recursos en sus territorios, acceder a un proceso educativo acorde con

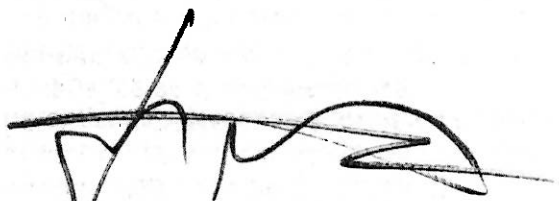
Aprobada  
In.

Sh

sus necesidades etnoculturales, acceder a medidas que les brinden mejores posibilidades económicas, tener acceso a la salud y a los servicios sociales, etc., y especialmente que garanticen que el Estado destine los recursos y procesos organizativos necesarios, orientados a recuperar, preservar y desarrollar su identidad cultural. En el marco de ello, en el país han sido expedidas distintas normas, entre las cuales resalta la Ley 70 de 1993, por medio de la cual se establecieron mecanismos para proteger su identidad cultural, así como garantizarles derechos especiales y beneficios basados en su carácter de minorías étnicas; por su parte, el Convenio 169 de la OIT, adoptado por Colombia mediante la Ley 21 de 1991, estableció la obligación del gobierno de desarrollar, con la participación de la población afrocolombiana, acciones orientadas a proteger los derechos de esa población y a garantizar el respeto de su integridad y su derecho a la igualdad de derechos y oportunidades, en las mismas condiciones que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población. Sumado a la mencionada Ley 70, han sido expedidas otro gran número de disposiciones y normas en pro de la población afrocolombiana, tales como la Ley 725 de 2001, *"Por la cual se establece el Día Nacional de la Afrocolombianidad"*, la Ley 1833 de 2017, *"por medio de la cual se modifica y adiciona la ley sa de 1992, se crea la comisión legal para la protección de los derechos de las comunidades negras o población afrocolombiana del congreso de la república de colombia y se dictan otras disposiciones"*, la Ley 2068 de 2020, *"Por el cual se modifica la Ley General de Turismo y se dictan otras disposiciones"*, entre otras.

Sin embargo, a pesar de que existen diversas leyes sobre el tema, en muchas ocasiones esas leyes se quedan en el papel y su reglamentación y cumplimiento no se lleva a cabo por las entidades competentes, ni tampoco se crean las políticas públicas necesarias para garantizar su acatamiento; lo que hace evidenciar, la importancia que tiene no sólo expedir normas que contengan acciones positivas que busquen beneficiar a la población afrocolombiana, sino también que dichas normas sean reglamentadas e implementadas por las entidades respectivas, con el fin de que tengan un alcance e impacto real sobre dicha población y así contribuir al mejoramiento de sus condiciones de vida y a la protección de sus derechos, tanto individuales como colectivos; siendo este punto donde la presente proposición encuentra su fundamento principal, motivo por el cual solicito a la Honorable Plenaria de la Cámara de Representantes aprobar la realización del mencionado debate de control político.

Cabe indicar que el cuestionario respectivo será remitido a la Secretaría General para su respectivo trámite. Cordialmente,



**JHON ARLEY MURILLO BENITEZ**  
Representante a la Cámara  
Presidente Partido Colombia Renaciente

N=061